

REPUBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

25ª REUNIÓN — 16ª SESIÓN ORDINARIA — 23 DE SEPTIEMBRE DE 1992

Presidencia del señor presidente provisional del Honorable Senado,
doctor EDUARDO MENEM,

del señor vicepresidente del Honorable Senado,
don ORALDO N. BRITOS,

y del señor vicepresidente 1º del Honorable Senado,
doctor LUIS AGUSTÍN LEÓN

Secretarios: doctor EDGARDO RENÉ PIUZZI y EDGARDO P. V. MURGUÍA

Prosecretarios: señor JUAN JOSÉ CANALS y doctor DONALDO ANTONIO DIB

PRESENTES:

AGUIRRE LANARI, Juan R.
BENÍTEZ, Alfredo L.
BITTEL, Deolindo F.
BRASCO, Luis A. J.
BRAVO, Leopoldo
BRAVO HERRERA, Horacio F.
BRITOS, Oraldo N.
CENDOYA, Jorge J.
CONCHEZ, Pedro A.
FIGUEROA, José O.
GASS, Adolfo
GENOUD, José
GURDULICH de CORREA, Liliana I.
JIMÉNEZ MONTILLA, Arturo I.
JUÁREZ, Carlos A.
LAFFERRIÈRE, Ricardo E.
LEÓN, Luis A.
LOSADA, Mario A.
MALHARRO de TORRES, Margarita
MARTÍNEZ, Daniel E.
MARTÍNEZ ALMUDEVAR, Enrique M.
MAZZUCCO, Faustino M.
MENEM, Eduardo
MOLINA, Pedro E.

NIEVES, Rogelio J.
OTERO, Edison
OYARZÚN, Juan C.
POSLEMAN, Eduardo A.
RIVAS, Olijela del Valle
ROMERO FERIS, José A.
RUBEO, Luis
SAADI de DENTONE, Alicia A.
SAPAG, Elías
SOLANA, Jorge D.
STORANI, Conrado H.
VELÁZQUEZ, Héctor J.

AUSENTES, EN COMISION:

AMOEDO, Julio A.
COSTANZO, Remo J.
LUDUEÑA, Felipe E.
MAC KARTHY, César
RODRÍGUEZ SAÁ, Alberto J.
ROMERO, Juan C.
SAMUDIO GODOY, Wilfrido
SÁNCHEZ, Libardo N.
SOLARI YRIGOYEN, Hipólito
TRIALLA, Juan
VACA, Eduardo P.

SUMARIO

1. Por invitación del señor presidente provisional del Honorable Senado, la señora senadora por Tucumán profesora Olijela del Valle Rivas procede al izamiento de la bandera nacional en el mástil del recinto. (Pág. 2601.)
2. Asuntos entrados:

- I. Comunicaciones de la Presidencia. (Pág. 2601.)
- II. Mensaje y decreto del Poder Ejecutivo por el que se prorroga el plazo establecido en el capítulo I de la ley 23.696 (emergencia administrativa) (P.E.-268/92.) (Pág. 2602.)
- III. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se modifican diversos artículos de la ley 24.013, de empleo. (P.E.-288/92.) (Pág. 2602.)
- IV. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba la Enmienda Relativa a la Entrada en Vigor del Artículo 6º del Estatuto del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (Unidroit). (P.E.-289/92.) (Pág. 2603.)
- V. Comunicaciones de la Presidencia de la Nación. (Pág. 2605.)
- VI. Proyecto de ley en revisión por el que se modifica la ley 19.279 (beneficios para personas lisiadas con relación a la adquisición de automotores). (C.D.-47/92.) (Pág. 2606.)
- VII. Proyecto de ley en revisión por el que se modifica la ley 23.298 (partidos políticos) respecto del Fondo Partidario Permanente. (C.D.-49/92.) (Pág. 2607.)
- VIII. Proyecto de ley en revisión por el que se declara de interés nacional la lucha contra la brucelosis. (C.D.-50/92.) (Pág. 2607.)
- IX. Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Convenio con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para la Promoción y la Protección de Inversiones. (C.D.-51/92.) (Pág. 2608.)
- X. Proyecto de ley en revisión por el que se modifica el Código Penal respecto de la figura de "desacato" y se deroga el artículo 244. (C.D.-52/92.) (Pág. 2608.)
- XI. Proyecto de ley en revisión por el que se crea un fondo rotativo para créditos productivos con destino a la pequeña y mediana producción. (C.D.-53/92.) (Pág. 2608.)
- XII. Proyecto de ley en revisión por el que se incluye a los artistas plásticos ganadores del premio "Honorable Senado

de la Nación" en los términos de la ley 16.516. (C.D.-54/92.) (Pág. 2610.)

- XIII. Proyecto de ley en revisión por el que se modifican los artículos 2º y 5º de la Ley de Saneamiento Financiero entre la Nación y las provincias (24.133). (C.D.-55/92.) (Pág. 2610.)
- XIV. Modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados en el proyecto de ley federal de educación que le fuera enviado en revisión. (S.-1/90, P.E.-327/90, S.-995, 1.275 y 1.380/91.) (Pág. 2611.)
- XV. Proyecto de ley en revisión por el que se modifica el Código Civil en cuanto al régimen de minoridad. (C.D.-58/92.) (Pág. 2622.)
- XVI. Comunicaciones de la Honorable Cámara de Diputados. (Pág. 2623.)
- XVII. Comunicaciones de señores senadores. (Pág. 2624.)
- XVIII. Comunicaciones oficiales. (Pág. 2624.)
- XIX. Dictámenes de comisiones. (Pág. 2626.)
- XX. Peticiones particulares. (Pág. 2631.)
- XXI. Proyecto de comunicación del señor senador Romero Feris por el que se solicita se solucione la problemática de las economías regionales y del campo argentino. (S.-724/92.) (Pág. 2632.)
- XXII. Proyecto de comunicación del mismo señor senador por el que se solicita el saneamiento de los cauces pluviales y afluentes de diversos ríos en Buenos Aires. (S.-725/92.) (Pág. 2632.)
- XXIII. Proyecto de comunicación del señor senador Oyarzún por el que se solicita se prohíba el paso por aguas argentinas de un buque japonés con cargamento de plutonio. (S.-726/92.) (Pág. 2633.)
- XXIV. Proyecto de declaración del mismo señor senador por el que se repudia un atentado con explosivos perpetrado contra el domicilio del secretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. (S.-727/92.) (Pág. 2634.)
- XXV. Proyecto de resolución de la señora senadora Rivas por el que se manifiesta preocupación por la decisión de los Estados Unidos de América de subsidiar exportaciones de trigo. (S.-728/92.) (Pág. 2634.)
- XXVI. Proyecto de ley del señor senador Sánchez por el que se establece un régimen para el funcionamiento de los hoteles al aire libre o campamentos. (S.-729/92.) (Pág. 2635.)
- XXVII. Proyecto de comunicación de la señora senadora Saadi de Dentone por

proyecto de ley de la señora senadora Rivas por el que se otorga, con carácter de cooperación, una suma de dinero a las provincias de Tucumán y de Catamarca. (S.-444/92.) Se aprueba una comunicación. (Pág. 2746.)

45. Consideración del dictamen de las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Educación en el proyecto de comunicación del señor senador Bittel por el que se solicita la cancelación de la deuda que las escuelas nacionales de comercio números 1 y 2 de Resistencia, Chaco, mantienen con la empresa provincial Secheep. (S.-487/92.) Se aprueba. (Pág. 2747.)

46. Consideración del dictamen de las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Romero Feris por el que se solicita un subsidio para la Asociación Cooperadora del Colegio Provincial "Félix María Romeo", de Chavarría, Corrientes. (S.-263/92.) Se aprueba. (Pág. 2748.)

47. Consideración del dictamen de las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales, de Presupuesto y Hacienda, de Economía y de Vivienda en el proyecto de ley en revisión referente al saneamiento y reestructuración del Banco Hipotecario Nacional. (C.D.-12/92.) Se aprueba. (Pág. 2749.)

48. A moción del señor senador Genoud se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de comunicación del que es autor por el que se solicita se comprometa un porcentaje de los ingresos del Banco Hipotecario Nacional para detener la ejecución a que se refiere el artículo 12 de la ley sancionada en el punto anterior de este sumario. (S.-299/92.) (Pág. 2757.)

49. A moción del señor senador Britos se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de ley del que es autor junto con otros senadores por el que se prorrogan plazos establecidos en la ley 24.017, de jubilaciones especiales. (S.-780/92.) (Pág. 2757.)

50. Moción del señor senador Britos para pasar a cuarto intermedio hasta mañana a las 15 en caso de no poder continuar esta sesión por falta de quórum. Se aprueba. (Pág. 2757.)

51. Moción de preferencia de la señora senadora Saadi de Dentone para considerar en la próxima sesión, con dictamen de comisión o sin él, el pedido hecho en la cuestión de privilegio por ella planteada en el punto 6 de este sumario. Se aprueba. (Pág. 2758.)

52. Consideración del dictamen de las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación de la señora senadora Saadi de Dentone por el que se solicitan informes sobre el destino de los fondos asignados a diversas escuelas de Catamarca. (S.-293/92.) Se aprueba. (Pág. 2758.)

53. Consideración del dictamen de las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Figueroa por el que se solicita un subsidio para la Municipalidad de Loreto, Santiago del Estero. (S.-323/92.) Se aprueba. (Pág. 2759.)

54. Consideración del dictamen de las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Figueroa por el que se solicita un subsidio para la Escuela N° 1161, de Colonia El Simbolar, Santiago del Estero. (S.-324/92.) Se aprueba. (Pág. 2761.)

55. Consideración del dictamen de las comisiones de Interior y Justicia y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se crea un juzgado federal de primera instancia en Dolores, Buenos Aires. (C.D.-127/91.) Se aprueba. (Pág. 2762.)

56. Consideración del dictamen de las comisiones de Interior y Justicia y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Figueroa por el que se solicita un subsidio para la provincia de Santiago del Estero con destino a la construcción de la morgue judicial. (S.-318/92.) Se aprueba. (Pág. 2763.)

57. Consideración del dictamen de las comisiones de Interior y Justicia y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Ludeña por el que se solicita un subsidio para la diócesis de Río Gallegos. (S.-366/92.) Se aprueba. (Pág. 2764.)

58. Consideración del dictamen de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación de la señora senadora Saadi de Dentone por el que se solicita un aporte financiero para el cumplimiento de la ley 23.739, referida al paso fronterizo de San Francisco, Catamarca. (S.-46/92.) Se aprueba. (Pág. 2766.)

59. Consideración del dictamen de las comisiones de Recursos Hídricos y de Obras Públicas en el proyecto de comunicación de la señora senadora Gurdulich de Correa por el que se solicita la rehabilitación del canal Emilio Mitre, en el río de la Plata. (S.-452/92.) Se aprueba. (Pág. 2766.)

60. Consideración del dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Agricultura y Ganadería en el proyecto de comunicación del señor senador Mazzucco por el que se solicita se entreguen subsidios aprobados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. (S.-538/92.) Se aprueba. (Pág. 2767.)

61. Consideración del dictamen de la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente Humano en el proyecto de comunicación del señor senador Oyarzún por el que se solicita se declare de interés nacional a la Fiesta Provincial del Medio Ambiente ECO Ushuaia '92. (S.-533/92.) Se aprueba su pase al archivo. (Pág. 2768.)

62. Consideración del dictamen de las comisiones de Recursos Naturales y Ambiente Humano y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Vaca por el que se solicita se prohíba el ingreso al país de todo tipo de residuos, desechos o desperdicios. (S.-1.090/91.) Se aprueba. (Pág. 2769.)

63. Consideración del dictamen de la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente Humano en el proyecto de comunicación del señor senador Ludueña por el que se solicita se extremen las medidas de control sobre las industrias ubicadas en la cuenca del río Reconquista. (S.-688/92.) Se aprueba. (Pág. 2770.)
64. Consideración del dictamen de la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente Humano en el proyecto de declaración del señor senador Oyarzún por el que se declara de interés nacional del Honorable Senado la realización de la I Fiesta Provincial y Nacional del Medio Ambiente, ECO Ushuaia 92. (S.-592/92.) Se aprueba su pase al archivo. (Pág. 2771.)
65. Consideración del dictamen de las comisiones de Obras Públicas, de Transportes y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley del señor senador Aguirre Lanari por el que se autoriza al Poder Ejecutivo nacional a disponer la construcción de un nuevo puente que unirá las provincias de Corrientes y Entre Ríos. (S.-332/92.) Se aprueba. (Pág. 2772.)
66. Consideración del dictamen de la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente Humano en el proyecto de comunicación del señor senador Ludueña por el que se solicita un subsidio para la Municipalidad de Puerto Santa Cruz. (S.-689/92.) Se aprueba. (Pág. 2773.)
67. Consideración del dictamen de las comisiones de Economía y de Presupuesto y Hacienda en las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto que le fuera pasado en revisión sobre Ley Orgánica del Banco Central de la República Argentina. (S.-719/91.) Se aprueba. (Pág. 2774.)
68. A moción del señor senador Rubeo se considera sobre tablas y se aprueba con modificaciones un proyecto de ley presentado por señores senadores de distintos bloques del Honorable Senado vinculado con la transferencia gratuita de inmuebles estatales en favor de provincias, municipios y comunas. (S.-785/92.) (Pág. 2800.)
69. Lectura de la nómina de miembros propuestos por el Poder Ejecutivo para integrar la Cámara Nacional de Casación Penal, acerca de los cuales se solicita acuerdo. Se remite a la Comisión de Acuerdos. (P.E.-290 a 302/92.) (Pág. 2811.)
70. Consideración del dictamen de las comisiones de Agricultura y Ganadería, de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Previsión Social en el proyecto de comunicación de los señores senadores Gass, Malharro de Torres y Genoud por el que se solicita se declare el estado de desastre y la emergencia agropecuaria en varios distritos de la provincia de Mendoza. (S.-1.208/91.) Se aprueba. (Pág. 2812.)
71. Moción de los señores senadores Storani y Britos de pasar a cuarto intermedio hasta mañana a las 12. Se aprueba. (Pág. 2814.)
72. Apéndice:
 - I. Sanciones del Honorable Senado. (Pág. 2814.)
 - II. Inserciones. (Pág. 2819.)

—En Buenos Aires, a las 17 y 16 del miércoles 23 de septiembre de 1992:

Sr. Presidente (Menem). — La sesión está abierta.

1

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente (Menem). — Invito a la señora senadora por Tucumán doña Olijela del Valle Rivas a izar la bandera nacional en el mástil del recinto, y a los presentes a ponerse de pie.

—Puestos de pie los presentes, la señora senadora Rivas procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)

2

ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (Menem). — Por Secretaría se va a dar cuenta de los asuntos entrados. Oportunamente se hizo llegar a los señores senadores la nómina de los expedientes ingresados desde la última sesión. Este es el momento en que deben hacer las observaciones que estimen pertinentes.

—La nómina de los asuntos entrados, con las observaciones formuladas, es la siguiente:

I

Comunicaciones de la Presidencia

Decreto del 25 de agosto por el que se autoriza a la señora senadora Saadi de Dentone a viajar a San Pablo, Brasil, desde el 27 al 31 de agosto, para participar de la "2da. Reunión de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Latinoamericano". (D.P.-616/92.) (A sus antecedentes.)

—Decreto del 9 de septiembre por el que se autoriza a los señores senadores Aguirre Lanari y Rodríguez Saá a viajar a Cambridge, Gran Bretaña, desde el 16 al 23 de septiembre, para participar de la 3ª Conferencia Argentino-Británica. (D.P.-629/92.) (A sus antecedentes.)

—Decreto de la misma fecha por el que se autoriza al señor senador Sánchez a viajar a Wistler, Canadá, desde el 16 al 23 de septiembre, para participar en el Congreso Mundial de Turismo de Aventura y Ecología. (D.P.-630/92.) (A sus antecedentes.)

—Decreto de la misma fecha por el que se autoriza a los señores senadores Mac Karthy y Ludueña a viajar a Madrid, España, desde el 20 al 25 de septiembre, para participar del XV Congreso Mundial de Energía. (D.P.-631/92.) (A sus antecedentes.)

—Decreto del 23 de septiembre por el que se adhiere al sentimiento de pesar causado por el fallecimiento del senador (m.c.) Tomás Pedro Arana. (D.P.-634/92.) (A sus antecedentes.)

47

REESTRUCTURACION DEL BANCO HIPOTECARIO NACIONAL

Sr. Presidente (León). — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales, de Presupuesto y Hacienda, de Economía y de Vivienda en el proyecto de ley en revisión referente al saneamiento y reestructuración del Banco Hipotecario Nacional.

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Piuze). — (Lee)

Dictamen de comisiones

Honorable Senado:

Vuestras comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales, Presupuesto y Hacienda y Vivienda han considerado el proyecto de ley en revisión (C.D.-12/92), sobre el saneamiento y reestructuración del Banco Hipotecario Nacional; y, por sus fundamentos, os aconsejan su aprobación.

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 117 del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de las comisiones, 8 de septiembre de 1992.

Eduardo P. Vaca. — Juan C. Romero. — Juan Trilla. — Enrique Martínez Almudevar. — Héctor J. Velázquez. — César Mac Karthy. — Ricardo E. Lafferrère. — Juan C. Oyarzún. — José Genoud. — Ojeda del Valle Rivas. — Conrado Storani. — Julio A. Amoedo. — Felipe Ludeña. — Juan R. Aguirre Lanari.

Sanción de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación

(20 de mayo de 1992)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

TÍTULO I

Situación patrimonial e impositiva

Artículo 1º — Autorízase al Poder Ejecutivo a ratificar los acuerdos celebrados entre el Banco Hipotecario Nacional, el Banco Central de la República Argentina y la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, dirigidos a establecer la forma de cancelación de los créditos y deudas existentes entre ellos, según lo establecido en el acta de convenio del 23 de marzo de 1992 por ellos suscrita, y su participación en el Banco de Inversión y Comercio Exterior.

Art. 2º — Ratifícanse las exenciones dispuestas por el Poder Ejecutivo respecto del Banco Hipotecario Nacional, que comprenden los impuestos sobre los capitales, activos y a las ganancias, los que los sustituyan o complementen en el futuro y los de emergencia a los mismos.

Art. 3º — A partir del vencimiento de los beneficios establecidos en el artículo anterior, el Banco Hipotecario Nacional quedará eximido de los impuestos aludidos en el mismo, sólo para las operaciones, bienes, ganancias referidas a la cartera de préstamos para la vivienda de la institución. Igual temperamento se aplicará a partir de la vigencia de la ley 23.760 para el impuesto a los servicios financieros.

TÍTULO II

Desenvolvimiento operativo

Art. 4º — El Banco Hipotecario Nacional orientará su accionar como banco mayorista, para atender las necesidades de la población en materia de vivienda social única —y de uso permanente por el beneficiario según la reglamentación que dicte el banco— y desarrollo urbano. El Banco Hipotecario Nacional no podrá abrir nuevas sucursales, desarrollando sus operaciones con la banca nacional, provincial, municipal y privada, en un marco de eficiencia y rentabilidad, con exclusión de subsidios no expresamente contemplados.

Art. 5º — Derógase el artículo 2º de la Carta Orgánica del Banco Hipotecario Nacional, aprobado por la ley 22.232.

Art. 6º — Sustitúyense las siguientes normas de la Carta Orgánica del Banco Hipotecario Nacional, las que quedarán redactadas como a continuación se indica:

Artículo 4º: En todo cuanto haga a su funcionamiento, el Banco Hipotecario Nacional mantendrá sus relaciones con el Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.

Artículo 10: El gobierno del banco será ejercido por un (1) directorio compuesto por un (1) presidente, un (1) vicepresidente y cuatro (4) directores designados por el Poder Ejecutivo.

Artículo 17: El presidente, o quien lo reemplace, convocará a las reuniones del directorio como máximo dos (2) veces por mes, o cuando lo soliciten cualquiera de sus miembros o el síndico.

En las reuniones, el presidente o quien lo reemplace y tres (3) de sus miembros formarán quórum.

Las resoluciones serán adoptadas por simple mayoría de votos de los presentes, a excepción de aquellos asuntos que no cuenten con aprobación previa de las instancias administrativas correspondientes, en cuyo caso se requerirá su aprobación por cuatro (4) directores.

Artículo 25: Para el cumplimiento de su objeto el banco podrá:

- a) Conceder créditos con garantía real en primer grado de privilegio a personas de existencia visible o ideal, públicas o privadas, para la adquisición, construcción, ampliación, reforma, refacción y conservación de vivienda única —y de uso permanente por el beneficiario según la reglamentación que dicte el banco—, edificios y, en especial, equipamiento comunitario, tratándose de inmuebles urbanos o rurales, individuales o colectivos;

- b) Conceder créditos para la ejecución de obras de desarrollo, remodelación o preservación de núcleos y áreas urbanas, relacionado con las necesidades habitacionales o planes de vivienda que se ejecuten por el banco, previa consulta o intervención de los municipios;
- c) Conceder créditos para la realización de estudios e investigación sobre desarrollo urbano, habitacional y de edificación, en especial relativos a la reducción de costos, mejoramiento de las condiciones de habitabilidad, de los procedimientos y sistemas constructivos de las viviendas y al mejoramiento de las condiciones sociales, ambientales y sanitarias de los núcleos urbanos;
- d) Efectuar operaciones de redescuento de cartera hipotecaria y de coparticipación de financiación con entidades del sistema financiero oficial o privado;
- e) Efectuar inversiones de carácter transitorio en activos de fácil realización y bajo riesgo, con recursos provenientes de excedentes de liquidez;
- f) Otorgar avales, fianzas y otras garantías vinculadas con operaciones en las que esté autorizado a intervenir, suscribiendo toda clase de documentos comerciales a tal efecto;
- g) Emitir valores, bonos, obligaciones negociables y cualquier otro tipo de títulos circulatorios en moneda nacional o extranjera, previa autorización del Poder Ejecutivo, así como operar en el mercado respectivo por cuenta propia y/o de terceros.
No se requerirá la referida autorización cuando se trate de la emisión de certificados de participación sobre su cartera hipotecaria hasta el cincuenta por ciento (50%) del valor de la misma, debiéndose dar cuenta al Banco Central de la República Argentina;
- h) Recibir toda clase de depósitos a la vista y a plazo, de ahorro y en cuentas especiales;
- i) Obtener créditos del exterior, previa autorización de la autoridad competente, o de entidades financieras radicadas en el país y actuar como intermediario de créditos obtenidos en moneda nacional y extranjera;
- j) Cumplir mandatos y comisiones vinculados con sus operaciones y formar parte de consorcios de bancos que demanden o provean recursos coordinándolos y/o asumiendo su representación, organizar y administrar fondos de ahorro previo, u otros fondos inmobiliarios relacionados al tema habitacional;
- k) Actuar como representante de entidades financieras del país y del exterior, dentro de sus fines específicos;
- l) Asegurar cualquiera de los riesgos de las operaciones que realice o de los bienes que sean o hayan sido objeto de su financiación, aunque no hubieran sido dados en garantía,

e imponer seguros a los beneficiarios de sus operaciones;

- m) Adquirir bienes inmuebles, acciones y obligaciones en defensa o en pago de sus créditos y efectuar las inversiones para su mejor utilización, conservación y realización;
- n) A los fines del mejor cumplimiento de sus objetivos el Banco Hipotecario Nacional podrá realizar todas las actividades y/u operaciones no prohibidas por la ley a los bancos comerciales dentro de un perfil mayorista, actuando además como agente financiero del Estado en materia de vivienda, construcción y desarrollo urbano, e interviniendo por cuenta de éste en la asignación y distribución de recursos.

TITULO III

Determinación de saldos de deuda en la cartera hipotecaria

Art. 7º — El Banco Hipotecario Nacional procederá a fijar en todas sus operaciones de préstamos individuales, para la vivienda, los saldos de deuda al 1º-4-91 conforme las condiciones que se establecen. A tal efecto, dentro de los trescientos sesenta (360) días de la sanción de la presente, deberá dictar la reglamentación respectiva, la que preverá una disminución mínima de los saldos, no inferior al diez por ciento (10%) de la deuda calculada a la fecha establecida, por los índices originales.

Art. 8º — Los saldos de deuda de préstamos individuales provenientes de la operatoria HN 700 (reactivación variante II) y HE 311 serán recalculados sobre la base de tomar como precio de venta de las viviendas el valor básico de la operatoria incluido el coeficiente zonal actualizado por variación del índice del costo de la construcción del Banco Hipotecario Nacional al mes de marzo de 1991.

Ese resultado será referencial y podrá ser disminuido, mediante resolución fundada, en función de las características de cada proyecto y del valor real de sus unidades. A ese efecto, el Banco Hipotecario Nacional queda autorizado a categorizar los distintos proyectos tomándose como categoría básica la correspondiente a las exigencias mínimas de la operatoria y determinando, conforme los mejores niveles constructivos, otras tres: media, buena y muy buena.

Los nuevos saldos de deuda así determinados correspondientes a cada categoría resultarán de restar al precio de venta las amortizaciones ajustadas por igual índice.

Art. 9º — Para el resto de los préstamos se recalcularán los saldos de deuda a partir del 1º-8-87. Los saldos al 1º-4-91 resultarán de aplicar a los desembolsos efectuados o al monto del contrato, en su caso, el índice del costo de la construcción del Banco Hipotecario Nacional, con deducción de las amortizaciones ajustadas por igual índice.

TITULO IV

Nuevas condiciones de financiación

Art. 10. — Los saldos de deuda fijados conforme el título anterior devengarán un interés no inferior al uno

por ciento (1%) anual. Las tasas vigentes se ajustarán, en su caso, a partir del 1°-4-91.

Cuando, a criterio del Banco Hipotecario Nacional, las condiciones económicas de los préstamos se vieran alteradas, podrá modificar la tasa de interés para preservar el valor de sus créditos, capitalizándolos total o parcialmente.

En la relación de la entidad con el Banco Central de la República Argentina el porcentaje de interés capitalizado no se computará como interés aplicado.

Art. 11. — El servicio de reembolso será establecido en función de los nuevos saldos de deuda, tasa de interés y plazo faltante. El banco queda facultado para ampliar los plazos de amortización hasta un máximo de cincuenta (50) años a contar desde el inicio de la operación en los casos en que circunstancias especiales lo justifiquen, a cuyo fin el banco dictará la normativa pertinente.

Hasta tanto se concrete el recálculo de los servicios de reembolsos, se mantendrán las cuotas en los valores vigentes. El recálculo de que se trate deberá concretarse dentro de los trescientos sesenta (360) días de la sanción de la presente ley.

Art. 12. — El Banco Hipotecario Nacional adoptará las medidas necesarias para reducir el nivel de mora de su cartera hipotecaria. A tal fin deberá encarar, a través de los medios que le brinda su carta orgánica, la ejecución de todo préstamo que registre más de cinco (5) servicios en mora, salvo casos de excepciones particulares o generales que se excluyan por resolución debidamente fundada, en atención a serias situaciones de emergencia económica que afecten a los prestatarios.

Los deudores de la entidad contarán con un plazo de ciento ochenta (180) días a partir de concretado el recálculo de los servicios de reembolso a que se refiere el artículo anterior para la puesta al día de servicios atrasados y/o suscripción de convenios de refinanciación, en los que será condición para su otorgamiento estar al día en los pagos de los servicios posteriores a la notificación del recálculo.

Art. 13. — El Banco Hipotecario Nacional constituirá un fondo especial destinado a subsidiar los servicios de reembolso de los prestatarios que se encuentren afectados por serias situaciones de emergencia económica y que no pudieran ser atendidas mediante la renegociación del crédito. Dicho fondo se integrará con el dos por ciento (2%) de las sumas ingresadas en la vivienda. El banco deberá dictar la reglamentación destinada a fijar los recaudos para la constitución del fondo, el otorgamiento de dichos subsidios, así como sus alcances económicos temporales.

TITULO V

Cancelación anticipada

Art. 14. — A fin de facilitar la cancelación anticipada de préstamos, en los casos en que resulte conveniente para la entidad, el Banco Hipotecario Nacional podrá implementar, mediante resolución fundada, un régimen de bonificación especial sobre los créditos otorgados con anterioridad a la sanción de la presente ley.

TITULO VI

Disposiciones complementarias

Art. 15. — La normativa establecida en la presente, reemplaza a las condiciones de financiación anteriores contractualmente convenidas o fijadas por resoluciones internas del Banco Hipotecario Nacional.

Art. 16. — A efectos de determinar en forma precisa la situación y composición de su cartera hipotecaria, el Banco Hipotecario Nacional, podrá realizar censos particulares, o generales de deudores, que los beneficiarios deberán cumplir en carácter de declaración jurada. Sobre la base de los resultados de dichos censos el Banco Hipotecario Nacional efectuará los ajustes necesarios para asegurar la correcta fijación de los valores de las unidades de vivienda, por aplicación de las normas de la presente.

Asimismo, el Banco Hipotecario Nacional deberá dictar una reglamentación que complete la situación de anteriores beneficiarios de financiación que impida la duplicidad de apoyo financiero.

Art. 17. — Las compraventas, hipotecas, divisiones, sometimiento al régimen de la ley 13.512, cancelaciones y todo acto relativo al proceso de enajenación de viviendas individuales provenientes de operaciones globales de construcción financiadas por el Banco Hipotecario Nacional, cuyos proyectos se hayan iniciado con anterioridad a la sanción de la presente ley podrán concretarse por instrumentos labrados por el banco e inscritos en los registros de la propiedad por oficios suscritos por la autoridad que ejerza su representación, sus apoderados o funcionarios autorizados a tal fin.

Art. 18. — Facúltase al Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos a declarar con los alcances previstos en el artículo 48 de la ley 23.696, la rescisión de los convenios de financiación correspondientes a operaciones de obras masivas del Banco Hipotecario Nacional que se encuentren paralizadas como consecuencia de la emergencia económica que afectó a esa institución. La rescisión prevista en el párrafo anterior no procederá en aquellos casos en que sea posible la continuación de obras, previo acuerdo entre las partes, que se inspire en el principio del sacrificio compartido.

A tal efecto se fija un nuevo plazo de ciento ochenta (180) días para la renegociación de los convenios vigentes, vencido el cual el Banco Hipotecario Nacional elevará al citado ministerio la nómina de operaciones sujetas a rescisión.

Sin perjuicio de ello, en los casos en que mediare condena judicial por causa vinculada a las operaciones referidas, el Poder Ejecutivo queda facultado a incorporar la deuda respectiva en el régimen establecido en la ley 23.982.

Art. 19. — El Banco Hipotecario Nacional implementará una operatoria especial para atender la financiación de unidades de vivienda y obras de urbanización complementarias, destinadas a pequeñas localidades. Los créditos se otorgarán a solicitud de los municipios, quienes deberán elaborar los respectivos proyectos. El Banco Hipotecario Nacional admitirá las características y modos constructivos de los proyectos elaborados localmente, como forma de respetar las particularidades y ne-

cesidades de cada región del país. Los proyectos deberán adecuarse a los lineamientos generales que a este fin establezca el banco.

Por esta operatoria no podrán financiarse programas que superen las cien unidades habitacionales por localidad.

Los municipios podrán ejecutar las obras por administración directa, por el sistema de contratación de obras públicas que tengan establecido conforme las disposiciones legales vigentes, o mediante modalidades que contemple el esfuerzo propio y la ayuda mutua.

El Banco Hipotecario Nacional deberá destinar anualmente, para el financiamiento de esta operatoria, no menos del quince por ciento (15%) del total de créditos que otorgue medido en pesos, y deberá contemplar una equitativa distribución geográfica.

Art. 20. — Los bonos de consolidación de deudas previsionales a que se hace referencia en el último párrafo del artículo 14 de la ley 23.982, podrán ser aplicados a la par, sin restricciones al pago de las obligaciones vencidas o futuras que mantenga el suscriptor original con el banco.

Art. 21. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

ALBERTO R. PIERRI.
Juan Estrada.

ACLARACION

El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados corresponde al mensaje del Poder Ejecutivo 297 de fecha 10 de febrero de 1992.

Sr. Presidente (León). — En consideración en general.

Sr. Genoud. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (León). — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Genoud. — Señor presidente: se trata de un proyecto dirigido al saneamiento y reestructuración del Banco Hipotecario Nacional que cuenta con la unanimidad de los bloques para su aprobación.

Entendemos que es necesario que esta iniciativa cuente hoy con sanción completa, es decir, con nuestro voto afirmativo, quedando solamente la promulgación por parte del Poder Ejecutivo.

Pero he pedido la palabra porque hay un artículo, el 12, sobre el que quiero formular una sugerencia, no para modificar su texto sino para que quede constancia de nuestra preocupación. Es el artículo referido a la situación de casi doscientos cuarenta mil deudores que en este momento tiene el Banco Hipotecario. En él se señala que después de cinco servicios en mora el Banco tiene que comenzar la ejecución judicial de ese crédito.

Teniendo en cuenta lo que se expresó en la Cámara de Diputados y lo que voy a señalar ahora, nuestra preocupación está orientada a que el Poder Ejecutivo en la reglamentación disponga la posibilidad de que cada deudor pueda comprometer parte de sus ingresos, un porcentaje de sus ingresos, a los efectos de poder detener o frenar esa ejecución judicial.

Esta es la sugerencia que he recibido de ex funcionarios del Banco Hipotecario que están siguiendo muy de cerca todo este proceso legislativo para la reestructuración del Banco; incluso, actuales funcionarios del Banco señalan esto como una verdadera necesidad.

En concreto, que el Poder Ejecutivo establezca en la reglamentación la posibilidad de que el deudor pueda comprometer un porcentaje de sus ingresos —por bajos que éstos sean—; por supuesto debidamente constatados, a los efectos de detener la ejecución que pueda hacerle perder su vivienda.

Sr. Presidente (León). — Tiene la palabra la señora senadora por Santa Fe.

Sra. Gurdulich de Correa. — Nuestro bloque propone que esa sugerencia sea plasmada en un proyecto de comunicación, el cual una vez votado acompañe al proyecto de ley.

Sr. Genoud. — Me parece correcto, porque muchas veces las expresiones de los legisladores no son debidamente tenidas en cuenta por el Poder Ejecutivo cuando se redactan las reglamentaciones.

Si esta sugerencia se transforma en un proyecto de comunicación y es aprobado por el cuerpo, entonces sí queda una constancia concreta que el Poder Ejecutivo deberá tener en cuenta en el momento de dictar el correspondiente decreto reglamentario.

Sr. Presidente (León). — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Brasesco. — Señor presidente: simplemente deseo completar las argumentaciones que se han dado. Entiendo que es totalmente viable que en el decreto reglamentario el Poder Ejecutivo determine las pautas a que ha hecho referencia el señor senador por Mendoza y que afirmativamente ha recogido la señora senadora por Santa Fe. En tal sentido, si se encuentra en trámite judicial la ejecución o si la misma está por iniciarse, que el Banco esté autorizado —según lo establezca el decreto reglamentario— a proceder de acuerdo con estas instrucciones, en virtud de las cuales se pueda cobrar el crédito a su favor mediante la forma de pago dada por la retención y depósito directo de una determinada

cantidad de dinero para que se acredite a esa deuda.

Sr. Presidente (León). — Tiene la palabra el señor senador por La Pampa.

Sr. Conchez. — Señor presidente: para que esta sugerencia sea más taxativa, quisiera agregar una aclaración.

En el artículo 4º se señala que el Banco Hipotecario Nacional orientará su accionar como banco mayorista, para atender las necesidades de la población en materia de vivienda social única. A este respecto ex funcionarios del Banco me dijeron que convendría incluir bien expresamente a las instituciones intermedias, como las cooperativas, las mutuales o gremiales.

En conclusión, sugiero que se agregue luego de la palabra "mayorista", lo siguiente: "para instituciones cooperativas, mutuales, gremiales, deportivas". De lo contrario y tal como me lo han hecho saber ex funcionarios bancarios la situación se va a prestar para que, por ejemplo, nieguen un crédito a una cooperativa de vivienda.

Propongo que analicen si acepta el agregado.

Sr. Presidente (León). — Tiene la palabra el señor senador por Córdoba.

Sr. Cendoya. — Voy a solicitar respetuosamente al señor senador preopinante que retire la moción en tanto importa modificar el proyecto que requiere urgente sanción legislativa.

La observación formulada por el señor senador por Mendoza será convertida en un proyecto de comunicación, pero la propuesta del señor senador por La Pampa importa cambiar el texto legal lo que obligaría a remitir nuevamente este proyecto de ley en revisión a la Cámara de Diputados.

La aprobación de esta iniciativa reviste en la actualidad una situación de extrema urgencia. El Banco Hipotecario Nacional cuenta en este momento con una masa importante de recursos que, luego de la sanción de este proyecto volcaría a la operatoria de construcción de viviendas, de acuerdo con la nueva modalidad establecida.

Por lo expuesto me permito insistir en la necesidad de aprobar en general y en particular este proyecto a efectos de convertirlo en ley hoy. Los aspectos coyunturales podrán ser contemplados en un proyecto de comunicación.

Sr. Presidente (León). — Tiene la palabra el señor senador por La Pampa.

Sr. Conchez. — Dada la urgencia en la sanción de este proyecto, tal como lo acaba de exponer el

señor senador por Córdoba, que acepto como válida, considero que la modificación que propuso puede ser contemplada por la reglamentación.

Por lo expuesto acepto la observación y no insisto en que sea corregido ese párrafo.

Sr. Presidente (León). — Tiene la palabra el señor senador por el Chaco.

Sr. Bittel. — Tengo que realizar una observación con respecto al artículo 17 de esta iniciativa. Pero también reconozco que existe absoluta y total coincidencia en la necesidad de aprobar con urgencia este proyecto.

No estoy conforme con el texto del artículo 17, que considero introduce una modificación al Código Civil proque cuando habla de las compraventas, hipotecas, divisiones, etcétera, establece que cualquier funcionario puede extender la inscripción de estos documentos.

Por ello me reservo el derecho de presentar un proyecto de comunicación o ley modificatorio de este artículo, consciente de que la iniciativa deber recibir hoy sanción de este cuerpo a los efectos de que sea convertida en ley.

Sr. Presidente (León). — Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

Sr. Benítez. — Señor presidente: yo también debo hacer observaciones respecto del artículo 17.

Como seguramente mi lectura demorará un poco más del tiempo reglamentario, solicito que desde ya se me autorice esa prórroga, si así lo cree conveniente el honorable cuerpo.

Sr. Presidente (León). — En consideración el pedido formulado por el señor senador por Jujuy a los efectos de incluir en el debate la inserción solicitada.

Sr. Benítez. — No solicito una inserción ya que daré lectura al texto, porque como escribano me interesa...

Sr. Presidente (León). — Si lo lee, no hace falta la inserción, señor senador.

Sr. Benítez. — Señor presidente, señores senadores: con el artículo 17, seguramente sin proponérselo, al establecerse un sistema especial referido a la compraventa de inmuebles, hipotecas, divisiones, sometimiento al régimen de la ley 13.512, cancelaciones y todo acto relativo al proceso de enajenación de viviendas, al obviarse la escritura pública tal como lo requieren los artículos 1.184, inciso 1º, y 3.128, del Código Civil en vigencia, se asesta un golpe mortal a la institución que, desde el nacimiento de la civilización, conocemos con el nombre de fe pública.

Ella fue reconocida desde la más remota antigüedad, y se explica porque no se conciben una sociedad ni un pueblo que dejen de contratar, que no experimentaran, por consiguiente, la necesidad de autenticar en alguna forma los contratos y de designar a este efecto funcionarios especiales encargados de perpetuar las relaciones de los particulares mediante la autenticación.

Pero, ¿qué es la fe pública? La misma, en su acepción jurídica, ha surgido de la complejidad existente en las relaciones que los hombres se ven obligados a mantener entre sí, desde que viven en sociedad; de la forzosa limitación de sus derechos y de la necesidad de que el Estado, para cumplir sus fines, imponga a todos los que de él dependen, tanto con relación al espacio como al tiempo, la verdad oficial, la autenticidad que suponen todos los documentos y actos que emanan del funcionario que lo representa.

La fe pública es la creencia o confianza en algo que no hemos percibido por nuestros propios sentidos y que aceptamos por la autoridad de quien lo dice o por la fama pública; también es fe la seguridad que se da, o la afirmación que se hace, acerca de la verdad de algo.

“Era necesario —dice Demolombe en ese mismo sentido— para la seguridad social y para la tranquilidad de las familias, que hubiese alguna cosa de cierto.”

Administra la fe pública el Estado, que así como monopolizó la función legislativa e impidió el ejercicio de la justicia privada, arrogándose la exclusividad de la jurisdicción, también se reservó la alta función de certidumbre de hechos, valores u objetos. La autenticidad, alta función de certidumbre, ha quedado pues, también reservada a la administración del Estado, a través de calificados agentes.

Y es “el escribano público uno de los oficiales encargados de prestar fe pública por delegación del poder central y ostenta la máxima autoridad y presunción de legitimidad, por lo cual se distingue de los demás ciudadanos del país”. Así lo enseña José Máximo Paz.

Hay una absoluta conexión entre la fe pública y el notariado constituido por el escribano público, que es reconocido como el funcionario llamado a autorizar instrumento de carácter auténtico. Esto viene desde la antigüedad.

Según Diodoro Sículo, es en la más vieja de las antiguas civilizaciones, en el misterioso Egipto, en donde nació la doble institución del notariado, durante la dominación de Osiris.

En las procesiones de la diosa Isis iba un escribano sagrado, con una indumentaria exótica, lle-

vando un libro y una regla en la mano, tinta y un *calamus* para escribir. Debía dar fe de todo lo que ocurriese durante la ceremonia, así como de la ceremonia misma.

Modernas investigaciones han demostrado igualmente la existencia del notariado entre los asirios, caldeos y hebreos.

Si se ha de dar crédito a ciertas crónicas, en el proceso de Cristo ante Poncio Pilatos, figuran autenticando la sentencia de muerte los notarios Natán, Lucio, Sertillo y Amastrilliso.

Con sobrado acierto Fernando Fueyo Lanari sostiene que “lo grave es que no hay sistema alguno de sustitución”, y pregunta “¿cuál sería el otro que hiciere las veces del registro notarial y todo lo que gira jurídicamente en torno a él?”.

“La función notarial es una de las más indispensables para la conservación del orden y de la paz civil”, según la opinión de Bounoseur.

En el derecho inmobiliario alemán y austriaco se ha limitado injustamente la intervención notarial, provocando gravísimos problemas de honda complejidad, que constituyen una peligrosa elephantiasis en desmedro de la autenticación.

El artículo 1.184, inciso 1º, del Código Civil, señala que deben ser hechos en escritura pública los contratos que tuvieren por objeto la transmisión de bienes inmuebles en propiedad o usufructo, o alguna obligación o gravamen sobre los mismos, o traspaso de derechos reales sobre inmuebles de otro. El artículo 3.128 indica que la hipoteca sólo puede ser constituida por escritura pública.

Solamente autorizan escritura pública los escribanos u otros funcionarios autorizados para ejercer las mismas funciones y debe ser hecha en el libro de registro, que comúnmente llamamos “protocolo” —artículos 997 y 998.

El instrumento que labre el funcionario o empleado del Banco Hipotecario será un instrumento público —artículo 979— pero no una escritura pública, que sólo puede ser autorizada por el fedatario y en el protocolo.

Va de suyo que el notario no puede ser sustituido por un mero empleado o funcionario del Banco Hipotecario, en este caso. En primer lugar, porque ello choca con los inveterados principios que reglan la fe pública y el notariado, que como se ha dicho corren parejo y no puede separarse la una del otro.

La necesidad de la escritura pública es inexcusable por razones de autenticidad, seguridad y conservación. ¿Quién dará a los contratantes tes-

timonio de una escritura inexistente? ¿Por quién y adónde será conservado? En caso de desaparición del expediente administrativo, que después de cierto tiempo puede ser quemado, o de incendio y destrucción del asiento en el registro inmobiliario, ¿cómo se suplirá? Los preceptos legales e interrogantes citados en verdad llaman a la reflexión.

Nos parece correcto y responsable que el Estado tenga preocupación por el costo de la escritura de transmisión del inmueble o constitución de la hipoteca. Empero el honorario del notario, que es de la lista del banco, se halla reducido considerablemente por la ley 18.305 y por otros acuerdos especiales. El Consejo Federal del Notariado Argentino, en nota cursada al señor presidente provisional del Senado, ha expresado su disposición de reducir aún más los honorarios que se devenguen.

Los escribanos argentinos han soportado ya el desplazamiento de los protestos y cancelaciones de hipoteca que se han trasladado a otro ámbito. Ven así disminuida su fuente de trabajo con la consiguiente generación de un problema social. El Estado tiene la obligación constitucional de velar por el bienestar general. La defensa de unos no justifica la desprotección de los otros.

Por otro lado, es evidente que el Banco Hipotecario, con su actual personal, no está en condiciones de prestar un servicio extra. En consecuencia, deberá implementarse una estructura extrabancaria y estrictamente notarial, lo que contrariará los principios que informan las leyes sobre reformulación del Estado y emergencia económica.

He traído, aparte de las expresamente mencionadas, las opiniones de los tratadistas Baldana, Mustapich, Neri, Salvat, Segovia, Larraud, Josserand, Von Iherin, Giorgi, Bonnesse, Baslian, Núñez Lagos y Freitas. Me hago el deber de hacerlo constar.

Por todo lo brevemente expuesto propongo, haciendo formal moción, la supresión del artículo 17 en su oportunidad.

Por si ello no prosperare, y para la exégesis legislativa, se deja constancia de las expresiones vertidas por el señor interventor del Banco Hipotecario Nacional, ingeniero Horacio Alvarez Rivero, en la reunión celebrada el día 6 de agosto próximo pasado con los miembros de la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales, en el sentido de que el artículo 17 regirá únicamente para las escrituraciones no efectuadas hasta el día de la sanción de esta ley y no para los casos futuros, que se ajustarán a las

normas que rigen las relaciones entre el Banco Hipotecario Nacional y sus escribanos de lista. Por lo tanto, pido la inserción de la versión taquigráfica de dicha reunión.

Sr. Presidente (León). — Tiene la palabra la señora senadora por Santa Fe.

Sra. Gurdulich de Correa. — Señor presidente: el hecho concreto es que hay muchas viviendas sin escriturar y, por ende, están sin constituir las correspondientes hipotecas en favor del Banco Hipotecario Nacional.

Los adquirentes no tienen el dinero para hacer frente a los honorarios por escrituración e hipoteca. Por su parte, el Banco se encuentra inermemente frente a juicios de escrituración en los que resulta inevitablemente vencido.

Creemos que hay que encontrar un remedio a esto, ya que se trata de una situación excepcional, en la que todas las alternativas pueden presentar problemas.

No podemos negar que estamos "sorteando" el régimen de transferencia de dominio establecido en el Código Civil, pero esta excepción se aplica únicamente a la operatoria ya pasada. Al respecto hay por lo menos dos antecedentes: la ley 18.305, del año 1969 y la 18.307, de agosto de ese año.

Por eso, señor presidente, consideramos que, dada la situación de emergencia en que se encuentra el Banco y para poder poner en marcha el proceso de reestructuración de la manera más rápida posible, se debe mantener la redacción del artículo 17 sin modificaciones, tal como fuera aprobado por la Cámara de Diputados y como consta en el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente (León). — Como no hay quórum, se va a llamar para votar.

— Así se hace.

Sr. Benítez. — Si me permite, señor presidente, deseo manifestar que voy a votar afirmativamente en general el proyecto de ley y que cuando se trate el artículo 17 voy a votar por la negativa.

Sr. Britos. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (León). — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

Sr. Britos. — Señor presidente: he mantenido algunas conversaciones con los presidentes de los distintos bloques a efectos de que después del tratamiento de este proyecto de ley el

cuerpo trate sobre tablas otro sobre jubilaciones especiales, teniendo en cuenta que a fin de año caducan.

Me voy a referir a ellas. Muchos compañeros se van a encontrar con la triste novedad de que se les ha terminado su régimen. Por eso hemos acordado el tratamiento sobre tablas de este proyecto.

Sr. Brasesco. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (León). — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Brasesco. — Señor presidente, en efecto, el proyecto a que se refiere el señor senador Britos, que hemos suscripto, está vinculado al estudio que estaba y está realizando la Comisión Bicameral sobre los regímenes vinculados a ciertas actividades laborales, como por ejemplo la de los obreros de las minas, del vidrio, aquellos que trabajan en cámaras frías, entre otros. Esa comisión ha requerido del Poder Ejecutivo los antecedentes que impulsaron a dictar estas normas legales, circunstancia por la cual al no haber recepcionado la comisión la información, y teniendo en cuenta que esos regímenes que fueron prorrogados por seis meses caducarían en forma definitiva dentro de pocos días —lo que ocasionaría un serio problema y una seria anarquía en el sistema jubilatorio—, solicito el tratamiento sobre tablas, en forma inmediata, después de la consideración que estamos efectuando de la situación del Banco Hipotecario, para que la Cámara de Diputados de la Nación, que se encuentra sesionando y también lo hará mañana, pueda considerar el tema, en virtud de que hay consentimiento de todos los bloques para hacerlo.

—Se continúa llamando.

Sr. Posleman. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (León). — Tiene la palabra el señor senador por San Juan.

Sr. Posleman. — Solicito que por Secretaría se informe cuántos legisladores hay en la casa, porque nos encontramos con quórum muy estricto. Así, pues, en el caso de que haya suficientes legisladores, pido a los presidentes de bloque que insten a mis pares a que concurran al recinto para que esta sesión pueda continuar, dado que es larga la tarea que aún queda por realizar.

Sr. Presidente (León). — Por Secretaría se informa que hay treinta y cuatro señores senadores en la casa.

Sr. Posleman. — En ese caso, pido a los presidentes de bloque que insten a los legisladores que se hagan presentes en el recinto para que la labor pueda continuar.

Sr. Brasesco. — En caso de que no estén presentes los presidentes de bloque, que vayan los vicepresidentes.

Sr. Bravo Herrera. — Ya hay quórum, señor presidente.

Sr. Brasesco. — Falta uno.

Sr. Bravo Herrera. — Hay veinticuatro señores senadores presentes y, en total, somos cuarenta y seis.

Sr. Brasesco. — El quórum se forma con veinticinco.

Sr. Juárez. — La Cámara tiene cuarenta y cinco miembros reales; falta el representante de Jujuy.

Sr. Bravo Herrera. — Así es: el quórum se logra con veinticuatro.

Sr. Juárez. — Tiene razón.

—Luego de unos instantes:

Sra. Saadi de Dentone. — Ya hay quórum, señor presidente.

Sr. Presidente (León). — Se va a votar en general.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (León). — En consideración en particular.

—Se enuncian y aprueban los artículos 1° a 16.

—Se enuncia el artículo 17.

Sr. Benítez. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (León). — Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

Sr. Benítez. — Señor presidente: en razón de la exposición que he hecho anteriormente quiero dejar constancia de que mi voto con respecto al artículo 17 va a ser negativo.

Sr. Presidente (León). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—La votación resulta afirmativa.

—Se enuncian y aprueban los artículos 18 a 20.

—El artículo 21 es de forma.

Sr. Presidente (León). — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.

que las acechanzas que ensombrecen esa senda no serán las espadas y las lanzas de aquel entonces transformadas en el presente, por un extraño simbolismo, en hambre, endemias, desocupación, discriminación, injusticia social.

2

Solicitada por el señor senador Benítez

COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y MUNICIPALES

Reunión del jueves 6 de agosto de 1992

Tema: Reestructuración del Banco Hipotecario Nacional.

— Versión taquigráfica.

— En la ciudad de Buenos Aires, a las 11 y 26 del jueves 6 de agosto de 1992:

Sr. Vaca. — En primer lugar, quiero pedirles disculpas por la demora operada en el comienzo de esta reunión. En ese sentido, aclaro que esa demora obedeció a razones involuntarias.

Por otra parte, esta reunión ha sido convocada con el objeto de avanzar en un mayor conocimiento acerca del proyecto identificado bajo el número de expediente C.D.-12/92. Tal expediente contiene un proyecto sobre el saneamiento y reestructuración del Banco Hipotecario Nacional. Esta iniciativa fue girada en primer lugar a la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales y también ha sido derivada a las de Presupuesto y Hacienda, de Economía y de Vivienda.

Aquí están presentes las actuales autoridades del Banco Hipotecario Nacional, encabezadas por el ingeniero Horacio Alvarez Rivero, a quien agradezco muy especialmente su presencia, que nos será muy útil para informarnos de ciertos aspectos concretos de la situación. Asimismo, también están aquí distintos miembros de la Federación de Colegios de Escribanos, encabezados por el señor Héctor Jorge Caratoli, quien nos hará su aporte tendiente a esclarecer aquellos aspectos controvertidos de este proyecto en estudio.

Seguramente, a partir de las opiniones que escuchemos en esta reunión podremos ir encontrando las soluciones más adecuadas para resolver este tema.

A tal efecto, voy a ceder el uso de la palabra al ingeniero Alvarez Rivero, quien nos informará acerca de los fundamentos conceptuales y las características principales del proyecto en estudio.

Aclaro a los presentes que la mecánica habitual de este tipo de audiencias públicas consiste en escuchar en primer término a los distintos disertantes y, posteriormente, aquellos que tienen dudas sobre lo planteado podrán evacuarlas a través de las correspondientes preguntas.

Sr. Alvarez Rivero. — En primer lugar, quiero señalar que nos sentimos muy honrados por el hecho de estar aquí, en el Senado, para exponer nuestra opinión sobre este proyecto de ley que ha sido denominada de "saneamiento del Banco Hipotecario Nacional".

A tal fin, voy a hacer una muy breve reseña de la situación que motivó el dictado de esta ley. Como ustedes

Estimados amigos, tenemos por delante un extenso y rico sendero que transitaremos fraternalmente unidos en la búsqueda de la ansiada integración y el bien común de todos los latinoamericanos, reiterando que todos somos iguales ante los ojos de Dios.

saben, el Banco Hipotecario es una entidad con una muy vieja tradición; el año pasado cumplió 105 años de actuación ininterrumpida en el país. En sus épocas más relucientes fue el motor para la financiación y construcción de viviendas. Muchos de los aquí presentes — y una gran parte de los habitantes de nuestro país — hemos recibido un préstamo o tenemos a alguien muy cercano que lo ha recibido.

Ahora bien, a partir del período crítico — después de 1986 — el banco se comprometió con un plan de viviendas muy ambicioso, instrumentado a través de tres o cuatro programas que involucraban la construcción de viviendas de tipo social; los recursos para financiar este plan provenían del Estado, fundamentalmente por medio de los redescuentos del Banco Central. Posteriormente, a mediados de 1988, el gobierno nacional adoptó la decisión de interrumpir los desembolsos provenientes de los redescuentos, con lo cual el Banco Hipotecario entró en una situación crítica. En consecuencia, el banco debió paralizar el financiamiento de las obras y, en virtud de ello, debió fijar ciertas pautas. Así, se suscribieron actas con las entidades empresarias que representaban a los constructores de las obras, todo lo cual desembocó en un proceso que se agudizó con la hiperinflación de 1989.

Como consecuencia de los hechos relatados, el banco debió paralizar la construcción de cincuenta mil viviendas aproximadamente, las que se encontraban en distintas etapas de su construcción. Algunas de ellas estaban ya muy adelantadas — con más del 90 por ciento construido —, otras estaban en una etapa intermedia de construcción y había un resto que simplemente había recibido un acuerdo para su construcción.

Por otra parte, la entidad debió ajustarse a lo dispuesto por el decreto 1.319, donde se estableció una reestructuración muy importante de toda la institución. Así se dispuso el cese total de la operatoria como entidad de banco minorista, y quedó encasillado en la categoría de entidad de préstamo de segundo piso, o sea, un banco mayorista. Con esta medida el banco no pudo operar más con depósitos en cuenta corriente, con depósitos en caja de ahorro y con las demás operaciones correspondientes a un banco minorista. Así, la entidad pasó a ser una especie de administrador de recursos de su propia cobranza y como administrador de los recursos del FONAVI, para lo cual está expresamente designado por ley.

En ese mismo momento se produjo el cierre de un número muy importante de sucursales — aproximadamente treinta — dejando solamente una delegación por cada capital de provincia y la casa central, lo que totaliza un total de 24 casas.

Por otro lado, también se operó una reestructuración muy importante, a fondo, de la planta de personal. En aquel momento la entidad tenía aproximadamente 4.500

empleados y después de la reestructuración dicha planta disminuyó en 3.300 agentes, con lo cual actualmente la entidad cuenta con 1.200. Por supuesto, esta disminución del personal tuvo origen en el cierre de las sucursales y en el cambio de la operatoria bancaria, pasando a ser una entidad mayorista.

Paulatinamente el banco va recuperando sus posibilidades operativas, pero el cambio fundamental se produce a partir de abril del año pasado, oportunidad donde la entidad debe ajustarse a lo normado por la ley de convertibilidad. En esta norma se dice que los préstamos no pueden ser indexados, con lo cual se detiene el proceso de autogeneración basado en los períodos inflacionarios. Entonces, se llega a lo que podríamos caratular como "la hora de la verdad". El banco debe pasar a operar con patrones de tipo internacional, con recursos genuinos y con gastos que estuvieran ligados estrictamente a esos recursos. Finalmente, todo esto llevó al proceso que desembocó en el dictado de la norma en análisis.

Como decía antes, por influencia del proceso inflacionario al banco le resultaba muy difícil la cobranza de sus préstamos. La inflación imperante en el país generó una actitud de indisciplina de parte de los deudores, quienes no estaban dispuestos a cumplir con las cláusulas indexatorias provenientes de la aguda inflación que padecía nuestro país.

A partir de abril de aquel año se establece un cierre en la posición de cada uno de los deudores al mes de marzo y se determina que de ahí en adelante no se producirían más ajustes, lo cual permitió poder comunicarles a nuestros deudores cuál era el importe que debían pagar mensualmente. Y ahí nos encontramos con una situación que sería el "leit motiv" más importante del contenido de este proyecto, la situación de injusticia en la que quedaron muchos de nuestros deudores como consecuencia del proceso hiperinflacionario. Resulta que el banco, para ajustar préstamos, generalmente utilizaba índices de períodos anteriores al que producía el ajuste. Ese procedimiento de ajuste que técnicamente se llama asincrónico —a veces de dos o tres meses atrás— cuando toma el período de hiperinflación produce situaciones totalmente injustas por los índices aplicados, generalmente del INDEC, costo del salario total medio. Si en el momento en que se produce la entrega de la vivienda ocurre que alguno de esos índices se encuentra atrasado con respecto a la situación real del momento, el deudor firma su boleto a un valor determinado y, luego, cuando el índice retoma el valor que debe tener, se encuentra con que su deuda subió una, dos o tres veces, especialmente en el período hiperinflacionario de 1989.

Se llegó así a que había deudores que tenían una vivienda que había costado —a valor de hoy— 30 mil pesos y resulta que debían 80, 90 o 100 mil pesos. Y también se daba la situación en contraria: algunos deudores que tenían una casa de 30 mil, debían 10 mil.

Todo esto ocasionó una situación totalmente injusta que fue motivo de miles de reclamos, ya que los deudores no podían pagar. Primero se tomó una medida transitoria que consistió en aplicar un techo al valor de las cuotas para evitar estas situaciones de imposibilidad de pagar o insolvencia por parte de los deudores. Esto permitió descomprimir la situación, pero llegamos a la conclusión de que para dar una solución definitiva había que establecer el nuevo sistema de ajuste que permitiera

recalcular los valores del saldo del capital y que cada uno quedara debiendo lo que razonablemente vale la propiedad en la proporción en que el banco se la financió.

Para ello teníamos que estar en contra de lo que figura en la cláusula hipotecaria y debíamos propiciar el dictado de una ley que contiene un capítulo especialmente asignado al sistema de recálculo de la deuda y eventualmente una quita en el valor del saldo para poner los préstamos en un monto razonable y adecuado al valor de la vivienda que originalmente financió el banco.

Por otro lado el banco tenía una situación que era consecuencia de la hiperinflación en sus propios pasivos y activos. El caso que yo mencioné anteriormente era de los activos pero a su vez los pasivos del banco, casi en forma exclusiva con el Banco Central de la República Argentina, se habían hiperindexado también porque el Banco Central también aplicaba estos índices. Resulta que al momento en que nos hicimos cargo de la intervención el banco debía aproximadamente 4.500 millones de pesos y en la cartera del banco había tres mil, por lo cual había un capítulo negativo de aproximadamente mil millones.

A lo largo de un año, a través de un trabajo con el Banco Central, pudimos conciliar los saldos y establecer un nuevo sistema de cálculos que eliminara las distorsiones propias del período inflacionario. Así se llegó a firmar un convenio ratificado por el Banco Central a fines del año pasado en el cual se estableció que la deuda del Banco Hipotecario con el Banco Central era de 900 millones de pesos. A su vez, con un gran esfuerzo, el banco había conseguido cancelar esa deuda en el orden de 200 millones de pesos.

También había una deuda externa que estaba en el orden de los cien millones de pesos y, por otra parte, el Tesoro Nacional nos debía aproximadamente 75 millones de pesos. Y por imperio de la normativa a la que antes hice referencia en el decreto 1.319, el Banco Central y el Tesoro Nacional tuvieron que depurar sus cuentas, conciliar los saldos y someterlos a un convenio. Ese convenio se menciona en el artículo 1º en forma expresa autorizando al Poder Ejecutivo a ratificar los acuerdos.

Al disminuir este saldo del banco, pasando de 4.500 millones a 900 millones de deuda, se recompone su patrimonio y pasa a tener un patrimonio neto muy grande de 2.800, casi 3.000 millones. Pero había que tener en cuenta la situación de los deudores. Cuando se aplica el ajuste del saldo de capital, este patrimonio se deterioraría en su valor. Entonces se realizan todas las partidas para efectuar esa quita o ajuste del capital con lo cual el patrimonio neto bajó; a su vez se produjeron situaciones conflictivas propias del período de crisis que atravesó este banco. Hay un número muy importante de juicios entablados contra el banco y también un número importante de reclamos administrativos. Entonces, en un capítulo especial se establece una normativa por la cual el banco tiene un plazo —relativamente corto— de ciento ochenta días para resolver estas situaciones conflictivas con sus acreedores así como las tiene que resolver con sus deudores, lo cual se volcó a una previsión de posibles...

—Se interrumpe el registro taquigráfico por falta de suministro eléctrico.

—A las 12 y 05, luego de un corte en el suministro de energía eléctrica, continúa la reunión:

Señor presidente (Vaca). — Antes de cederle la palabra al señor presidente de la Federación de Colegios de Escribanos, quiero poner a consideración de todos la posibilidad de formularle algunas preguntas al anterior expositor.

Pérez Lozano. — Soy el rector de la Universidad Notarial Argentina. El señor interventor ha manifestado recién la necesidad de esta ley a fin de permitir que el banco pueda convertirse en una entidad mayorista.

En segundo lugar, en lo relativo a la emisión de obligaciones y títulos en base a la cartera hipotecaria, he leído en los fundamentos que el banco ya no garantizaría las operaciones, es decir, que el Estado no las estaría garantizando. Creo haber entendido que la seguridad, que ha sido la tradición y la esencia desde el nacimiento del Banco Hipotecario, es precisamente la estructura de la instrumentación hipotecaria sobre el cual se va a fundar la emisión de títulos para que el ahorro público se encuentre significativa e instrumentalmente con garantía especial y específica.

Todo esto encuadra dentro de la ley de emisión de obligaciones negociables en cuanto éstas pueden emitirse con o sin garantía especial. El gobierno de la Nación ha considerado al elaborar esa ley que en la medida de lo posible, y a fin de tener un mayor prestigio, deben emitirse con garantía especial.

En concreto, me gustaría saber si usted cree que la instrumentación hipotecaria sin escritura puede constituir la base para una garantía seria para el ahorro público, que muchas veces ha visto que sus ahorros — confiados a la banca privada — desaparecieron y aun no los han encontrado.

Alvarez Rivero. — Quiero aclarar algo que he omitido en el momento de realizar mi exposición. Hay un artículo especial en la reforma de la carta orgánica del banco, que deroga su artículo segundo. Creo que es el artículo quinto del proyecto. El artículo segundo dice que la Nación Argentina garantiza la operación del Banco Hipotecario. Es decir que siempre el banco tuvo el marco protector de la garantía. Cuando el banco emite una obligación, dicha obligación es en definitiva una obligación del Estado y como tal la computan todos los organismos de crédito internacional, especialmente el Fondo Monetario Internacional. Entonces, al consultar al Banco Central acerca de la posibilidad de emitir obligaciones negociables para financiar la construcción de viviendas se nos dijo que lo computarían dentro de la deuda pública del Estado argentino y esto le haría mal al país. Por tanto, nos pusimos a analizar en el área técnica cuál era la realidad de esta garantía del Estado. Y esta garantía del Estado nunca funcionó porque cuando el banco se queda sin dinero el Tesoro no aporta nada. Incluso la vieja deuda consolidada este año viene de decretos del año 1965.

Por lo tanto, una entidad fuerte ofrece mucha mayor confianza por su patrimonio y sus reservas. En este artículo se deja sin efecto la garantía explícita del Estado nacional, pero implícitamente...

— No se alcanzan a percibir las palabras del orador.

Lo que plantea el escribano con relación a esta cuestión se refiere evidentemente a los que serían otorgados en función de esta norma...

— No se alcanzan a percibir las palabras del orador.

Sr. (...). — En todo el país habrá alrededor de cuarenta mil escrituras pendientes de otorgamiento. En algunos casos tienen más de veinte años y se trata de personas de escasísimos recursos y durante todo este tiempo no hemos logrado que se pudiera regularizar esa situación dominial debido a la carencia de recursos.

En muchos casos los expedientes estuvieron en poder de escribanos de todo el país y nunca hemos podido arribar a una solución. Todo esto crea para el banco una situación de difícil solución, inclusive en la actualidad y a raíz de los impuestos que gravan el patrimonio se crean problemas a las entidades intermedias titulares de dominios, puesto que mientras no se desprendan de sus dominios, quedan colocadas ante los organismos del Estado en una situación de muy difícil aclaración.

Repito que esta es una vieja situación que tiene el banco y que — como dijo el señor interventor — esta ley tiende a que se pueda regularizar para comenzar prácticamente desde cero.

Sr. Pérez Lozano. — Quiero hacer una observación de carácter estratégico-económico. Creo que desaprovechar toda una cartera cuando se puede documentar y emitir títulos del banco con verdadero respaldo, es un despropósito. Digo esto porque estamos desaprovechando una cartera de viviendas que ya está hecha.

Por otra parte, quiero decir que el número de escrituras es mucho mayor que el que aquí se ha citado. Creo que llega al orden de las doscientas mil escrituras. Solamente con escuchar que hay cincuenta mil viviendas en terminación ya se superan las cuarenta mil escrituras a las que recién se acaba de hacer referencia.

Con respecto a los documentos y expedientes en manos del notariado, quiero destacar que debieron volver al banco porque fue imposible la escrituración por las razones que ratifico — y son ciertas —, dadas por el señor interventor: imposibilidad en cuanto a la determinación de montos líquidos para los planes globales y de dividir la hipoteca por llegarse a resultados económicamente absurdos, es decir en contra de la realidad. Entonces, no ha sido causa del notariado la no escrituración de esos planes. También podríamos — tal como lo expresan los motivos con los cuales se eleva la iniciativa — decir que este artículo está repetido; que es la reiteración de una ley que lleva más de veintidós años, y que todavía no se pudieron escriturar unas 3.700 viviendas por parte del banco.

Y hay algo más. El Banco Hipotecario tuvo que dictar una resolución pidiéndole al notariado que ayude al funcionario de la institución a realizar toda la instrumentación preparatoria y post escrituraria a efectos de cumplir con el artículo 2.505 del Código Civil y con el principio de oponibilidad a terceros. Quiero decir que la tendencia es hacia algo más sano en cuanto a toda esa cartera. Digo esto al ver la presencia aquí, en este salón, de representantes no sólo del organismo federal sino también de los presidentes de los colegios. Me estoy refiriendo...

riendo a la disposición por la cual se decide cobrar un honorario que como ustedes saben, no tiene significación económica en la operatoria. Porque según lo ha dicho anteriormente el señor gerente, lo único que realmente pesa es la parte tributaria o impositiva, en donde hubo hasta dudas en cuanto a si se liquidaba el IVA o el gravamen sobre el patrimonio de entidades intermedias.

Lamentablemente se ha desaprovechado este proyecto de ley para incluir nuevos institutos que nacen del Derecho Civil como el fideicomiso inmobiliario y el dominio imperfecto, lo que hubiera permitido contar con una extraordinaria garantía, fundamental para el banco.

En lo personal, lo que más y fundamentalmente me preocupa, es que se hagan hipotecas sin escritura, máxime con los antecedentes con los que contamos en este país, donde la excepción de inhabilidad de título ponga al banco otra vez en peligro.

Sr. Presidente del Colegio Notarial de Río Negro. — Nosotros estamos en la sucursal Neuquén.

Quiero preguntar al interventor si honestamente cree que en la práctica, con esa reducción tan importante del personal del Banco Hipotecario, se estaría en condiciones de asumir este trabajo; me refiero al propio personal del banco.

Esta pregunta surge como consecuencia de las conversaciones mantenidas con los funcionarios de la sucursal Neuquén, en el sentido de expresarnos el atiborramiento de trabajo —por así llamarlo— y la imposibilidad práctica de cumplir con todo. A punto tal que nos pidieron colaboración en el sentido de como se aproximan las subastas administrativas del banco a los deudores que no pagan, precisaban nuestra colaboración a efectos de acercar los certificados administrativos que se requieren para la subasta; esto es, para tener la liquidación de las deudas.

Pregunto si usted cree que en la práctica será posible instrumentar todo esto, sobre todo teniendo en cuenta que hay una estructura notarial ociosa y esperando directivas del banco.

Sr. Alvarez Rivero. — Anteriormente dije que está en nuestro espíritu trabajar junto con el colegio a efectos de analizar la posibilidad de llegar a un arancel primario que permita que el banco...

—No se alcanzan a percibir las palabras del orador.

—Luego de unos instantes.

Sr. Presidente del Colegio de Escribanos de Entre Ríos. — Recordamos una audiencia que deferentemente nos concedió el señor interventor hace más de un año en la cual se prefilaba este proyecto de ley hoy denominado de saneamiento del Banco Hipotecario. Muchos de los elementos conversados se dan como sentados en la iniciativa.

En esa audiencia fuimos tranquilizados en el sentido de que el motivo de nuestra presencia con el señor interventor era justamente poner a su disposición toda la infraestructura con la que cuenta el notariado a lo largo y a lo ancho del país para colaborar en la operatoria de la institución, por creer que hacía a su naturaleza que toda la operatoria estuviera respaldada por escrituras públicas.

Entonces, lo que queremos dejar sentado de nuestra parte es que no sólo venimos a defender el interés secto-

rial respecto de nuestra participación, sino que —como bien dijo el señor interventor— existen convenios en los cuales se establecen aranceles, con una incidencia económica insignificante.

Nuestra intención es defender un principio importante: la vigencia del Código Civil, de vital trascendencia para nosotros.

Creo que, despojando esto de toda intención sectorial, dejamos en claro nuestra posición en el sentido de que deseamos que se siga respetando el Código Civil tanto para operatorias futuras como anteriores. De ahí nuestro ofrecimiento, tal como lo ha dicho quien me ha precedido en el uso de la palabra.

Considero que con la reducción de personal que padece el banco, ya planteada, la institución no va a estar en condiciones técnicas ni de conocimiento para poder realizar tanto la operatoria hipotecaria como la administrativa. Esa experiencia ya ha existido. Tuvo vigencia tanto con la inscripción de las cancelaciones, con la existencia de miles de expedientes pendientes, como con las cláusulas de inembargabilidad y en escrituras de entidades intermedias.

Una de las figuras muy importantes que trajo a colación precisamente el señor interventor en su momento como una de las mayores bondades del sistema de participación notarial fue la existencia de la escritura pública...

—No se alcanzan a percibir las palabras del orador.

Sr. Presidente del Colegio de Escribanos de Entre Ríos. — ...de que administrativamente en forma permanente se vencen los plazos por no tener conocimiento ni estar en condiciones de manejar ese aspecto.

Es por eso que ratificamos nuestra voluntad en el sentido de que se mantenga el sistema establecido por el Código Civil, porque ello constituye una garantía tanto para el banco en particular como para el Estado en general.

Sr. ... — Hablo de la situación de las viviendas que no se llevaron a cabo, sobre todo las operatorias atrasadas incluyendo no solo las del Banco Hipotecario sino también la del Plan FONAVI.

Sr. Alvarez Rivero. — No es así.

Sr. ... — Todas esas viviendas están fuera de lo que marcan las leyes de nuestra Nación. En los casos de sucesiones o divorcios todo se resuelve por resoluciones administrativas. Por ende, nos encontramos en una paradoja: estamos frente a la necesidad de incorporar a dichas viviendas dentro de lo que marcan las leyes vigentes. En la práctica, debemos resolver este problema de alguna forma.

Sr. Subinterventor. — Con respecto a la vigencia del Código Civil y las manifestaciones pronunciadas por el señor interventor quiero decir que debemos hacer una clara distinción entre la situación actual y la por venir. Actualmente, el banco tiene ciertos problemas con algunas cancelaciones y con distintos títulos. Si bien existen algunas diferencias en los números que nosotros manejamos con relación a los que ustedes poseen, cabe aclarar que hemos pedido colaboración para todo esto y hemos suscripto convenios previos a la ley.

Nosotros reconocemos la necesidad de la actuación de ustedes para lo que tiene que ver con la operatoria futura del banco, puesto que ello no podría realizarse sin escrituras.

Debemos regularizar la situación bajo el principio del sacrificio compartido, que es lo que solicitamos al sector de ustedes. Si pensamos que la vigencia del Código Civil se ve restringida por este principio, también debemos sostener que los institutos civiles del fideicomiso y la propiedad indivisa imperfecta pueden ser de gran beneficio. En ese sentido creo que no podemos pensar que esto sería restrictivo de la seguridad que plantea el Código Civil porque se trata de una excepción, que está planteada de aquí para atrás.

Como decía antes, la necesidad de la actuación de ustedes está contemplada en las futuras operatorias del banco, donde nosotros no intervendremos porque en tales situaciones serán los bancos minoristas y ustedes los que labrarán esas escrituras públicas.

Sr. Ruiz. — Quiero hacer una pregunta al señor interventor. En su intervención habló de saneamiento del Banco Hipotecario. Yo tengo la sensación de que esa denominación "saneamiento" no se compadece con la realidad. El artículo 17 habla de dos tiempos: para atrás y para adelante. Justamente en virtud de ese artículo 17 los títulos portantes van a adolecer de todos los vicios que tienen aquellos actos que no se instrumentan por escritura pública, que es el único instrumento que dará garantía cierta a los derechos del banco.

Consecuentemente, va a llegar el día en que va a ser necesario sancionar una ley para el saneamiento de los títulos que expedirá el banco de aquí para atrás.

Pregunto: ¿ha sido tenido en cuenta el hecho de que esos títulos puedan ser objetados? ¿Se considera ese riesgo?

Nosotros no estamos defendiendo ninguna clase de interés corporativo de sector alguno. Estamos defendiendo principios, o sea, la integralidad de lo que es la estructura jurídica a través del Código Civil, que establece que para la extinción de todo acto hecho por escritura pública es necesario hacer otra escritura pública. Concretamente, la hipoteca hecha por escritura pública no puede ser modificada por un simple acto administrativo.

Sr. Alvarez Rivero. — El término "saneamiento" implica una serie de cosas. Entre ellas abarca la reestructuración de los saldos de deudas de nuestros deudores, la estructura orgánica del banco, modificada y reformada, etcétera.

Ahora bien, el saneamiento de fondo está vinculado con la estructura patrimonial, o sea, la limpieza de sus pasivos y de sus activos, lo cual involucra acciones ligadas más bien a la parte de recaudación, pagos y movimientos contables. El espíritu de todo esto es encontrar una vía administrativa que traiga una solución para la situación actual.

En ese sentido quiero manifestar que la experiencia que hemos recogido en virtud de las ejecuciones realizadas por el banco indica que nunca fueron discutidos los títulos públicos. El banco nunca ha perdido juicios en función de esa cuestión, salvo en aquellos casos en que existieron errores. Cuando se debe ejecutar una hipoteca, ello obedece a situaciones de otro carácter y nunca

se presenta por falta de vigencia o de seguridad en los títulos del banco.

Sr. Subinterventor. — Esta facultad de cancelación no es nueva. El diputado Baglini destacó los antecedentes y la facultad de cancelación que posee el banco, que ya estaba establecida por leyes anteriores.

Como decía recién el señor interventor no hemos tenido problemas con nuestros títulos. Aquí no se está innovando. Se trata de una facultad otorgada por ley. El tema es que queremos sanear definitivamente esta situación.

Cabe consignar asimismo que tenemos otras facultades además de la recientemente indicada, como es la de rematar administrativamente. Justamente en este caso los colegios de abogados podrían argumentar que de esa manera estamos lesionando sus propias facultades. Y no es así. Se trata de una facultad que poseemos desde siempre y que figura en la Carta Orgánica. De cualquier manera, se la ha utilizado muy pocas veces y en casos muy conflictivos, donde teníamos suma necesidad de echar mano a este instituto.

Repito: el compromiso con ustedes está tomado, pero lo fundamental es que no creemos que tendremos necesidad de intervenir mucho.

Sr. Asesor del senador Oyarzún. — No me quedó claro cuál es la alteración del estatuto introducida por el artículo 17.

Sr. Alvarez Rivero. — Las facultades las tenemos para distintos casos: para ejecuciones hipotecarias, para cancelaciones de oficio, etcétera. La modificación operada incluye solamente la ampliación de dichas facultades, es decir, su generalización para todas las operaciones anteriores a la vigencia de esta ley. Esa sería la modificación.

Sr. Presidente. — Le concedo la palabra al señor Jorge Carátoli.

Sr. Carátoli. — Como presidente del Consejo Federal del Notariado Argentino es un deber insoslayable agradecer en nombre de todo el notariado del país la fina sensibilidad que ha tenido la comisión de invitarnos a esta audiencia pública.

Realmente éstas son las insistencias que la democracia nos da para poder expresar las opiniones.

No sólo como dirigentes de una entidad intermedia inserta en un programa social preocupada por el interés general, por el bien común y por la consideración y respeto de las instituciones de la República sino también como ciudadanos, resaltamos y valorizamos que se cumpla la labor del Congreso que tiene como facetas esenciales legislar hacia el futuro y dar la oportunidad para que la sociedad pueda escuchar estas discusiones, cambio de opiniones, intercambio de experiencias y que la reflexión necesaria nos asegure el poder contar con normas ajustadas a las necesidades y a los intereses o convenios coyunturales del momento.

Respecto del proyecto de ley sobre saneamiento del Banco Hipotecario quiero expresar que rescato y exalto la honestidad intelectual del señor interventor del banco al hablar públicamente sobre el convenio y también al afirmar la voluntad del notariado en condiciones que apunten al interés general. Pero no podemos dejar de omitir la inconveniencia de este artículo en virtud de que los argumentos de costos que se esgrimieron en su momento — realmente hay que decirlo — no son tales.

Todas las provincias en función de su autonomía para el tema, en sus respectivas exposiciones o leyes fiscales o códigos penales han determinado la exención del impuesto para estos actos jurídicos o de tasas de servicios para el otorgamiento del acto. Además la existencia de una ley creo que es una decisión involuntaria. En los fundamentos no se dice que la rebaja está lindando con la gratuidad, los honorarios de los escribanos han disminuido aún más por convenios en casi todas las provincias por el Banco Hipotecario y por los grupos intermedios para poder permitir que progrese el funcionamiento de la titulación mediante el estudio del Código Civil.

Tampoco podemos dejar de decir que aquí se habló de una ley del año 70. Han transcurrido veintidós años. Esa leyenda estaba destinada a la escrituración de tres mil setecientas viviendas de dos partidos de la ciudad de Buenos Aires: Tres de Febrero y La Matanza. No descalificamos aquella ley dictada en el año 70. Pero, ahora, a veintidós años hay una ley que se está tratando en este Congreso en donde se reproduce una norma de un gobierno que no respondía a las características del actual. En consecuencia, de sancionarse este proyecto de ley, se produciría un efecto contrario a lo que se busca en la propia ley del banco.

Si esto se realiza, de esta forma se ensancharían las funciones del banco, cosa que es imposible realizar actualmente debido a la escasez de recursos humanos. Pues habría que acudir a personal idóneo y ocasionaría un costo mucho mayor que si continuamos con el actual régimen y respetando nuestra legislación.

Este artículo está destinado a ser letra muerta porque es imposible su aplicación. Lo que importa es dejar un precedente de orden jurídico. Que el Banco encuentre alguna forma de resguardar la seguridad patrimonial jurídica de los beneficiarios de estos planes de vivienda.

Además de las fallas que va a tener este instrumento en sí por la falta de incapacidad para realizarlo en el futuro ¿qué va a hacer un adquirente para obtener su título público? La seguridad jurídica está comprometida de forma tal que no puede ofrecerse en ese artículo. Si le agregamos una excepción más a otra que al orden jurídico estamos contribuyendo a generalizar las excepciones. Somos buenos para una sociedad que quiere tener paz social. Si no hay paz jurídica es muy difícil que haya paz social.

Por último, quiero destacar que los tiempos legislativos no pueden recibir urgencias ni presiones, aun con los fines altruistas que hoy se plantean aquí.

Creemos que estos tiempos legislativos dan la posibilidad de este intercambio de ideas en la seguridad de que con su conciencia y madurez se anida ahí mismo el valor de la seguridad jurídica y también la consolidación de todas las libertades que no pueden estar ausentes en ningún acto de la Nación.

Por estas razones, señor senador, el notariado se opone y resalta las palabras del señor interventor como también las de nuestro anterior interlocutor que son el fiel reflejo de nuestros pensamientos.

El tema está en manos de los señores senadores. El Notariado aspira a resolver esto dentro del marco jurídico actual y con su colaboración. Cualquiera fuera el resultado de la sanción de este proyecto el Notariado va a estar siempre dispuesto a colaborar con el Banco Hipotecario y con todo otro reclamo social. El interés general está por sobre el interés sectorial y en esa posición el Notariado deja planteada la cuestión.

Sr. Presidente. — Les agradezco a todos los que nos han acompañado en esta reunión. Y quiero que sepan que en el momento de legislar vamos a tener en cuenta todo lo debatido aquí.

Quiero en primer lugar agradecer la clara comprensión que, sobre la tarea legislativa, tiene el señor presidente de la Federación de Colegios de Escribanos en el sentido de que está muy difundida por allí la lentitud del Congreso en sus decisiones, como si esto se debiera a que los legisladores son insitivamente malos o perversos. Pero esto no es así.

Lo que ocurre es que en el Congreso se expresa la pluralidad de la sociedad argentina.

Es muy difícil lograr unificar en conceptos esa pluralidad. Esto lleva un mayor tiempo que el que insumiría la decisión en el caso de tratarse de un gobierno de tipo autoritario, pero esta voluntad política surgida de ese consenso es mucho más firme y duradera que la que puede surgir de pequeños cenáculos.

Les agradezco su presencia y volveremos a vernos en futuras reuniones.

—Son las 12 y 47.

3

Solicitada por el señor senador Vaca en la sesión del 29 de septiembre de 1992

Proyecto de Saneamiento y Reestructuración del Banco Hipotecario Nacional

Sr. Presidente:

El objetivo de este proyecto de ley es reestructurar y sanear el Banco Hipotecario Nacional, entidad que tiene 105 años de acción ininterrumpida. La crisis del Hipotecario es básicamente la crisis de la hiperinflación y de la imposibilidad de financiar la construcción de viviendas —una operatoria de mediano y largo plazo— con redescuentos del Banco Central de la República Argentina. Ese esquema llegó a una etapa terminal en 1988. En ese entonces se interrumpieron los redescuentos, se paralizó

el financiamiento de las obras y, por ende, se debieron renegociar los contratos formalizados con las empresas constructoras. A partir de allí virtualmente cesó la actividad del banco como entidad minorista.

Mediante el decreto 1.319/91 se lo reestructuró, convirtiéndolo en banco mayorista y desde entonces no recibe más depósitos en cuentas corrientes ni en cajas de ahorro. Su función actual es la de una especie de administrador de recursos de su propia cobranza y de operador de fondos aportados por el FONAVI.

El proceso de reestructuración supuso una drástica reducción del personal que pasó de 4.500 empleados a 1.200, clausurándose también buena parte de las sucursales.

sales. Ha llegado la hora de la verdad para el Banco Hipotecario: como toda entidad financiera sana deberá proveerse recursos genuinos, obtenidos del mercado o de líneas de financiamiento internacional. Además deberá tener una estructura de gastos coherente con la necesaria relación costo-beneficio de toda entidad financiera.

La situación sin salida en la que se encontraba el Hipotecario dio origen al proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo nacional, en revisión de la Cámara de Diputados, instrumento mediante el cual será posible sanear esta institución centenaria.

En su primera parte la ley facilita la consolidación de la deuda con el Banco Central y con la Secretaría de Hacienda, que en buena medida se originó en los redescuentos otorgados entre 1983 y 1988. De esta forma se cancelan créditos y deudas entre las partes de acuerdo con lo establecido en el acta-convenio del 23 de marzo de 1992. Hasta el momento el Banco Hipotecario Nacional viene cumpliendo con los compromisos allí asumidos, situación que tiene su explicación en la notoria mejoría observada en la cobranza de sus créditos.

En este proyecto de ley también se han dispuesto exenciones en el pago de los impuestos sobre los capitales, a los activos y a las ganancias, descartándose como integrante de la base imponible los montos correspondientes a la cartera de préstamos para la vivienda del banco. De otra forma sería imposible la normal operatoria de la entidad pues se distorsionaría por completo el cuadro de costos si se tiene en cuenta la importancia de capitales y activos de la cartera hipotecaria y la tributación que ello implicaría.

En concreto el banco queda eximido de los impuestos aludidos en las operaciones, bienes y ganancias referidas a la cartera de préstamos para la vivienda. Además se lo exime de los impuestos a los servicios financieros.

Una modificación fundamental es la transformación del banco en un operador mayorista. De ahora en más no podrá abrir nuevas sucursales y su operatoria deberá desarrollarse a través de la banca comercial privada o del resto de la banca nacional, provincial o municipal. Los fondos deberán provenir del mercado, a cuyo efecto se lo habilita para emitir obligaciones negociables escriturales, nominadas en dólares cotizadas en bolsas y mercados del país y del exterior. Esto no es otra cosa que darle nueva vida a las viejas cédulas hipotecarias.

El Hipotecario también será el receptor de líneas internacionales de crédito destinado a la construcción de viviendas.

Coherentemente con este proceso de reestructuración de esta entidad se ha reducido el número de integrantes de su directorio. Del mismo modo las sucursales pasaron de 57 a 24 lo que dio como resultado una fuerte disminución de los gastos operativos. El banco concentrará su actividad en el financiamiento, mediante líneas de créditos individuales destinados a la adquisición y construcción de viviendas para uso familiar. Muy particularmente tendrá en cuenta el apoyo a programas de reinserción laboral que impliquen cambio de vivienda así como el financiamiento para la compra de inmuebles del Estado. Pero como el banco tendrá una gestión propia de la banca comercial su actividad no habrá de agotarse en aquellas líneas que tienen claras connotaciones sociales. Por eso habrá líneas de créditos para empresas constructoras, que obligarán a la necesaria participación de

bancos minoristas que cofinanciarán la construcción o terminación de viviendas.

Aquí debe aclararse que el artículo 6º del proyecto mediante el cual se modifica el artículo 25 de la Carta Orgánica fue levemente modificado al tratarse en la Cámara de Diputados, agregándose tras la palabra "financiación" la especificación de que ésta debía volcarse a "vivienda social única y de uso permanente por el beneficiario". De esta forma se estaría recortando erróneamente las facultades que por esa misma carta orgánica tiene el Banco Hipotecario Nacional. Es cierto que tal como se establece en el artículo 4º del proyecto debe contemplarse la prioridad social del destino de las viviendas financiadas por el Hipotecario, pero allí no se agota la operatoria a la que debe estar facultada esta entidad, que por su condición mayorista precisamente debe tener amplias posibilidades de desenvolvimiento operativo, sin confinarla en el estrecho campo de la "vivienda social única y de uso permanente por el beneficiario".

En el debate de la Cámara de Diputados se advirtió en parte esa incongruencia, y en el calor de la discusión se propuso y se aprobó que esa financiación de "vivienda social única y de uso permanente por el beneficiario" deberá hacerse "según la reglamentación que dicte el banco".

En rigor de verdad la reglamentación de la ley deberá resolver esta incongruencia entre los objetivos de banca mayorista que se le dan al Banco Hipotecario Nacional y la limitación surgida del artículo 6º. Más aún; estas razones harían aconsejable propiciar la reforma del proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, para ajustarlo al original remitido por el Poder Ejecutivo Nacional, y que es además el texto vigente de la carta orgánica del Banco Hipotecario Nacional. Sin embargo, la urgencia en la sanción de esta ley, de la que depende la inmediata transformación de la entidad, me lleva a preferir el camino de resolver esta incongruencia por vía de la reglamentación, confiando en que la interpretación auténtica del texto no se aparte de los fines perseguidos por el legislador y despoje todo posible intento de limitación de las facultades operativas de la institución.

Un aspecto muy importante de este proyecto es el referido a las deudas de los titulares de los créditos. La perniciosa influencia de la inflación y el efecto caótico de la hiperinflación en los procesos de ajuste monetario dieron como resultado cuotas de amortización absolutamente desproporcionadas respecto de los créditos otorgados, de los valores de las viviendas financiadas y más aún en relación con los ingresos de los beneficiarios de los créditos.

Se hace necesario corregir los desequilibrios ocasionados por la aplicación asincrónica de varios índices combinados que terminaron por llevar la deuda a valores desmedidos. El recálculo de las deudas y la disminución de los saldos a que autoriza esta ley, así como el incremento del valor de las viviendas, harán más llevadero el pago de las cuotas. De hecho, debido a la estabilidad económica ya se ha logrado una relación más lógica entre el valor de la propiedad y el monto de la deuda y existe también una relación más ajustada entre el monto de la cuota y el valor de un alquiler alternativo.

La renegociación de la deuda permitió normalizar el cobro del grueso de la cartera. Entre el 85 y el 90 % de los créditos se están ya amortizando regularmente. El

esfuerzo ha sido enorme porque este banco tiene nada menos que 193.000 créditos para administrar. Con el fin de hacer más fácil el pago se han fijado nuevas condiciones de financiación, autorizándose al banco para ampliar los plazos de amortización hasta un máximo de 50 años, según surge del artículo 11. En el artículo 13 se ha establecido la obligación de constituir un fondo especial para subsidiar el reembolso de aquellos préstamos cuyos titulares están afectados por situación de emergencia económica. Ese fondo se integrará con el dos por ciento de lo que ingrese por intereses sobre los préstamos y también habrá una bonificación especial por las cancelaciones anticipadas.

La escrituración y constitución de hipotecas, así como la división en propiedad horizontal de las viviendas financiadas por la institución, "cuyos proyectos se hayan iniciado con anterioridad a la sanción de la presente ley podrán concretarse por instrumentos labrados por el banco". En otras palabras, y sólo para las operatorias pasadas, únicamente se podrá reemplazar la escritura pública, realizada ante escribano de registro por el acto administrativo del banco.

Con esto se busca dar respuesta a una situación sin salida, ya que en muchos casos los prestatarios no tienen

los recursos necesarios para afrontar los gastos de escrituración. Esta iniciativa tiene antecedentes en la ley 18.307, de anotaciones hipotecarias para los préstamos globales y también en la ley 18.740 que benefició con un sistema similar a diversos barrios carenciados.

En la medida en que el banco no ha podido escriturar una buena parte de las viviendas que financió, también debe enfrentar los juicios de escrituración que le hacen las empresas constructoras, con el enorme perjuicio que suponen los costos de los litigios. Aplicando el principio del sacrificio compartido, debe aceptarse este remedio excepcional, aunque dejando en claro que esta excepcionalidad nunca podrá aplicarse a las futuras operaciones que realice el banco. Hacia adelante, en todos los casos, tanto las transferencias de dominio como las constituciones del derecho real de hipoteca deberán hacerse por escritura pública, según lo establece el Código Civil.

La necesidad de reestructuración de la banca oficial es innegable y entre las instituciones más castigadas por las distorsiones provocadas por la inflación está precisamente el Banco Hipotecario Nacional. Con esta ley le estamos dando al poder administrador el instrumento idóneo para superar esa situación.

4

Solicitada por la señora senadora Gurdulich de Correa

En verdad, bajo el proyecto de ley en consideración del Honorable Senado, están contenidos dos proyectos.

El primero referido a la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina y el segundo a modificaciones introducidas básicamente a la ley de Entidades Financieras.

Ocurre que luego de sancionado por el Senado el proyecto de ley destinado a dotar de nueva Carta Orgánica al Banco Central de la República Argentina, y remitido a la Cámara de Diputados de la Nación para su consideración, aquella Cámara consideró oportuno utilizar la instancia legislativa abierta por la sanción de la Carta del Banco Central e introducir modificaciones a la Ley de Entidades Financieras.

El procedimiento es perfectamente admisible aunque razones de prolijidad determinen la conveniencia de sancionar dos proyectos de ley al respecto.

En cuanto a la sanción del Senado y sobre la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados han respetado el perfil de Banco Central adoptado por la sanción del Senado.

Básicamente, el Banco Central que quiso este Senado en su sanción de noviembre de 1991 era y es uno cuya misión fundamental fuere la de preservar las funciones del dinero como reserva del valor, unidad de cuenta e instrumento de pago, para lo cual se buscaba y se busca un Banco Central independiente del Ejecutivo y sujeto, fundamentalmente, a las potestades del Congreso de la Nación en materia monetaria y cambiaria.

Para ello, el Senado pensó en un Banco Central gobernado por un directorio cuyo lapso de gestión no coinci-

diese con los del Poder Ejecutivo y cuya designación debiese contar con el acuerdo del Senado.

Con el fin de asegurar la independencia del Banco Central se introdujo en la sanción del Senado un procedimiento destinado a reglar la remoción de los miembros del Directorio quienes, antes de ser desplazados de sus cargos, podrán ejercitar su derecho de defensa ante una Comisión integrada por legisladores nacionales, quienes serán los encargados de aconsejar la remoción de los directores, o no.

Todas estas características de la sanción del Senado de hace casi un año —que, bueno es destacarlo, ha sido recibida con elogios por los operadores económicos—, ha sido respetada por la aprobación de la Honorable Cámara de Diputados.

No obstante, esa Cámara ha introducido pequeñas modificaciones en el texto de la primitiva sanción que, si bien son opinables, pueden ser aceptadas en homenaje a una rápida sanción definitiva de este proyecto de ley.

Una de las modificaciones, susceptible de ser calificada como opinable, es la vinculada con la calificación que hacía la sanción del Senado de definir al Estado en cuyo seno actuará el Banco Central como el Estado federal.

El proyecto de Diputados se refiere a Estado nacional.

La correcta denominación jurídica y constitucional es la de Estado federal, que se utiliza para designar a aquel en el cual coexisten dos o más centros productores de derecho.

En nuestro país, coexisten el derecho dado por el Estado federal con el derecho emanado de los estados provinciales o locales.